

INTRODUCCIÓN

El presente libro trata sobre la agricultura chilena en la primera mitad del siglo xx, desde 1910 a 1960, un período que abarca cambios importantes que modifican su posición dentro de la economía nacional y la ponen en el centro de los debates públicos.

Se parte en la década de 1910, cuando la economía vive los comienzos de la transición de la estructura que ha predominado desde mediados del siglo xix, con el paso de una economía esencialmente exportadora de materias primas, principalmente minerales pero también, en menor escala, productos agrícolas, por lo tanto abierta al mundo, cuya producción descansa principalmente en el norte y centro del país, a una economía volcada al desarrollo interno, crecientemente industrial. Por este momento, grandes extensiones de tierras del sur se vinculan a la economía nacional y su producción agropecuaria adquiere relevancia. La expresión más clara de esto es el término del ferrocarril longitudinal sur, que une el sur del país hasta Puerto Montt con el centro.

La Primera Guerra Mundial marca el quiebre del orden liberal en lo económico, los primeros tropiezos serios de la economía exportadora, particularmente de la producción salitrera, que entra en un ciclo de debilitamiento e inestabilidad, y el inicio del fortalecimiento de las industrias, principalmente las de bienes de consumo. En lo político, la «cuestión social», nombre con el que se designaba las pésimas condiciones de vida de los asalariados y sus demandas por acabar con tal situación, aparecía como el problema principal. En 1920 comienza la pérdida de poder político de la oligarquía tradicional, y nuevas elites urbanas, de sectores medios y populares, adquieren mayor poder de presión e influencia. En ese contexto, el Estado comenzará a adquirir nuevas funciones políticas y económicas.

La agricultura, que había sido dominada sin contrapesos por los terratenientes del centro del país, empieza a experimentar demandas de tierras, de mejores remuneraciones y condiciones de vida por los campesi-

nos, incluso se escuchan las primeras propuestas de subdivisión de las propiedades rurales, esto es, reforma agraria. A su vez, se manifiestan deficiencias productivas, escasean y se encarecen los alimentos, como la carne, y crecen las importaciones de ganado argentino.

Entre 1924 y 1932 el país vive una profunda inestabilidad política y económica, en cuyo seno se moldea el Chile de las próximas décadas. Golpes de Estado por los militares, dictaduras, organizaciones paramilitares, pugnas entre grupos urbanos y populares, son elementos de este proceso. La difícil situación política recibió su golpe de gracia con la crisis económica de 1929-1930. El Estado aumenta sus funciones en el control de la economía y paralelamente crece la burocracia. En 1932 Chile retorna a la normalidad política, con elecciones regulares y partidos políticos que retoman su papel; más numerosos que antes, se disputan un electorado en crecimiento, especialmente en las ciudades. En lo económico, la recuperación de la crisis recién comenzará a manifestarse por 1935.

Dentro del período estudiado, los años 1924-1935 definen el paso a un nuevo orden político y económico. El país fortalece su economía interna y pierde peso el comercio exterior. El Estado pasa a ser árbitro de los procesos económicos nacionales.

La agricultura, que había tenido un crecimiento destacado en las décadas anteriores, con cierta presencia en el comercio exterior, aunque con un sector ganadero que se estancaba, sería la primera actividad en conocer la intervención estatal, desde 1930, a través de la fijación de algunos precios agrícolas y establecimiento de cuotas de exportación. A su vez, la crisis económica obligó a una intervención general en los precios de artículos de primera necesidad, que con algunas suspensiones, se mantuvo en el futuro.

Los cambios económicos a favor del desarrollo de una economía nacional más autónoma del comercio exterior, generaron una readecuación del papel de la agricultura, la que se convirtió fundamentalmente en proveedora de las necesidades del mercado interno. La producción agropecuaria en sus rubros esenciales, trigo y carne vacuna, se trasladan, en un proceso de largo plazo, hacia el sur, y el centro pierde el peso decisivo que ha tenido en las décadas anteriores.

El sur de Chile, cuya integración a la economía nacional ha crecido en las primeras décadas del siglo xx, todavía mantiene dificultades de transporte, caminos, provisión de insumos, etc., para consolidar su nueva posición dentro de la agricultura nacional y poder satisfacer la demanda de las ciudades principales en el centro del país. Además, el cierre de los mercados externos limita las posibilidades para su expansión productiva.

Sin embargo, para muchos, el sur se encontraba en un buen pie para resolver todas esas dificultades, después que el Estado resolviera entre 1925 y 1932 el problema de la propiedad de la tierra, revisando títulos y derechos de dominio, e iniciara la división de las comunidades indígenas.

En general, los cambios políticos y económicos nacionales de estos años fortalecen un proceso de desarrollo urbano e industrial, con elites medias y populares como actores principales. Sin embargo, la agricultura seguirá siendo por muchos años un sector fundamental, tanto por aporte a la producción nacional como por la mano de obra empleada. Además, hasta 1938 la influencia política de las elites rurales seguirá siendo determinante.

1938 marca un giro hacia la izquierda en la política nacional y la definición de un Estado comprometido con la industrialización. El Gobierno apuesta por una política de sustitución de importaciones que permita incrementar la riqueza nacional y la haga menos dependiente. La agricultura queda relegada a una posición secundaria. La intervención en los precios agrícolas y en la comercialización de los productos agropecuarios aumenta. Tal situación se extendería sin mayores cambios hasta 1952, cuando tras el fracaso de las políticas económicas se buscó darle mayor libertad a la economía. Los malos resultados obtenidos y las protestas populares hicieron que lo esencial de la política económica a favor de la industria y la postergación de la agricultura se mantuviera.

Las políticas estatales y los cambios nacionales e internacionales provocaron un desempeño agrícola deficiente, que se manifestaba en un lento crecimiento de su producción, inferior a las necesidades de la economía nacional y de la población. Ya desde la Segunda Guerra Mundial era claro un estancamiento agrícola, relativo por cierto. La importación de alimentos, que en el caso de los vacunos había sido tradicional desde el siglo XIX, se extendió al trigo, y a veces a la manteca y otros productos lácteos, sin contar azúcar, aceite y otros. Argentina, gran productor agropecuario durante todo el período estudiado en este libro, contribuyó a resolver fácilmente las carencias nacionales, a bajos precios. No eran pocos los que durante la primera mitad del siglo XX, viendo el enorme crecimiento agropecuario argentino, plantearon que Chile no requería dedicarse a producir alimentos, pues podían ser adquiridos en el país fronterizo. En los años cincuenta, también Estados Unidos será proveedor de productos agrícolas.

La carencia de producción restableció la propuesta de una reforma agraria. La idea venía siendo repetida desde la década de 1910, pero el estancamiento agropecuario hizo que adquiriera mayor apoyo. Se culpa-

ba a la propia agricultura de sus problemas; el latifundio y el atraso técnico, se decía, eran las causas de ello.

Sin embargo, los Gobiernos no respondían a esas llamadas. Se ha dicho, que desde la década de 1930 la industrialización del país se sostuvo en un pacto político tácito, por el cual las nuevas elites urbanas fueron apoyadas por los terratenientes en consolidar ese proceso vía intervención estatal, que también incluía control de los precios y de la comercialización de productos agrícolas, para proveer a bajos precios a los sectores urbanos, base política del sistema, a cambio de excluir al campo de los planes de modernización. Así, el agro fue alejado de la sindicalización y demás derechos laborales que se reconocieron a los trabajadores y empleados urbanos. A pesar de que el Código del Trabajo de 1931 había sancionado esos derechos para todos los trabajadores, desde 1933 se impidió la existencia de sindicatos, peticiones y huelgas en el campo. El Estado se encargó de reprimir cualquier modificación de la «paz rural» existente. Este pacto entre las elites urbanas y los terratenientes habría evitado la modernización y mantenido el dominio terrateniente y la perpetuación de las deficiencias productivas agrarias.

La agricultura ineficiente, cada vez más incapaz de producir lo que el país requería, se mantuvo por ese pacto político. El estancamiento agrícola sólo tuvo paliativos desde el Estado, a través de la asistencia técnica, infraestructura, investigación, etc. En cualquier caso, el Estado gastaba muy poco en el agro.

Sin dudas, la política económica que favorecía la industrialización discriminó de muchas formas a la agricultura. Los bajos precios agrícolas en rubros esenciales hicieron poco rentable la actividad. A su vez, la falta de inversión estatal no proveyó de lo necesario en caminos, transporte, insumos, investigación, etc., para su mejoramiento.

También, más allá de la política estatal, la propia situación económica nacional fue un pésimo escenario para la agricultura, cuyo destino era satisfacer la demanda interna. Independiente de las propias deficiencias agrarias, la inflación, la falta de mercados externos, las dificultades para acceder a los mercados urbanos, por distancia, costos, medios de transporte, el endeudamiento externo, la restricción a las importaciones de insumos, el escaso poder adquisitivo de la población nacional, entre otras razones, contribuyeron a deteriorar el conjunto de la economía nacional. Hacia la década de 1950, la economía experimentaba serias deficiencias, muy visibles en el sector agropecuario.

Los cambios políticos no se hicieron esperar. Después del dominio de Gobiernos de centro-izquierda, entre 1938 y 1952, que habían sostenido políticas de estricto control de la economía, llegaron Gobiernos de de-

recha que intentaron variar el rumbo de la economía con recetas liberales; restringiendo el presupuesto gubernamental, el crédito y las alzas de sueldos y un menor control del comercio exterior. Las medidas no produjeron resultados favorables y la situación se agravó por 1955-1958. Para los agricultores, que habían resistido la discriminación estatal, combatiendo los precios agrícolas oficiales, demandando el control de las importaciones agropecuarias y pidiendo más gasto público en el agro, el cambio político representó la posibilidad de modificar la acción estatal. Sin embargo, la profundidad de las deficiencias económicas y la complejidad del sistema político, multipartidista y multclasista, impidieron esto.

Las críticas hacia el estancamiento agrícola y su efecto en la débil economía nacional aumentaron, por más que en la década de 1950 la agricultura experimentara cambios importantes. La reforma agraria se convertía en un proyecto político cada vez más fuerte. Además, el campo comenzaba a ser un espacio importante para la obtención de votos por los partidos políticos. Se denunciaba la ineficiencia de los terratenientes, su escasa tributación, su enriquecimiento a costa de la pobreza del campesinado, en fin, la agricultura era la responsable del subdesarrollo nacional. Hasta la inflación, el gran mal de la economía, tenía parte de su origen en la ineficiencia productiva agrícola.

El camino para la reforma agraria estaba preparado. Hacia 1960, fecha de término de este libro, las fuerzas políticas partidarias de una transformación profunda del agro sumaban mayoría. Su objetivo era acabar con el poder terrateniente, con la excesiva concentración de la propiedad de la tierra y aumentar la producción.

Dentro del panorama descrito anteriormente se construye este libro. Rechazamos las explicaciones tradicionales sobre el estancamiento agrícola. Sin desconocer las carencias y cualidades de la agricultura nacional, creemos que las raíces del estancamiento agrícola, relativo, estaban menos en la propia agricultura que fuera de ella. Estaban principalmente en la política estatal industrial y su discriminación de la agricultura. Sin embargo, eso es sólo una parte de la explicación, que requiere otros elementos para ser una explicación acabada del fenómeno aludido. Por otro lado, consideramos equivocada la idea de un pacto político entre elites urbanas y terratenientes. A lo más, si es que lo hubo, su existencia fue mucho más breve de lo que se supone.

Sostenemos que para comprender el desempeño agrícola en el período 1910-1960, y particularmente las deficiencias del agro desde los años treinta, así como las políticas estatales, sus motivaciones y efectos en el agro, debemos considerar un elemento que ha estado ausente, o subesti-

mado, en las explicaciones dadas en la época y en la literatura posterior, a saber; el factor regional. No se entiende completamente lo que sucedió con la agricultura nacional si se olvida la geografía de la producción agropecuaria, esto es, que durante el período estudiado los rubros principales de ella se trasladan del centro al sur del país. De tal modo, los problemas de la agricultura fueron cada vez más durante esos años problemas del sur de Chile. Asimismo, la discriminación de la agricultura más que contra todo el sector fue contra los intereses del sur del país. Fue la agricultura de esta zona la que pagó el precio más alto por el abandono del sector. Así, creemos, se hace más comprensible que el Estado haya podido relegar a la agricultura a una posición secundaria, que la intervención del Estado en los precios agrícolas haya tenido permanencia en el tiempo, que las inversiones en el área hayan sido escasas y que la infraestructura nacional haya sido pobre.

De este modo, creemos que las políticas estatales fueron responsables en gran parte del estancamiento agropecuario, tanto por su ausencia en las primeras décadas del siglo xx, como por su énfasis desde los años treinta en el desarrollo urbano e industrial, y la consiguiente discriminación hacia la agricultura, evidenciada en las pocas inversiones en el sector agrario, en la fijación de precios agrícolas bajos, en la escasa provisión de insumos, etc. Más aún, esas políticas, y esto es lo novedoso de este libro, miradas atentamente afectaron principalmente al sur del país. El sur producía gran parte del trigo y carne vacuna, los principales productos cuyos precios eran fijados por el Estado; el sur carecía de abonos, que era el que más los necesitaba; el sur era el que menos infraestructura caminera tenía. Por el contrario, el Estado atendió preferentemente las necesidades agrarias del centro del país, en cuanto a su preocupación por la legislación laboral, por el fomento de la fruticultura, acceso a créditos, obras de riego, caminos, etc.

El menor peso de la política de discriminación de la agricultura en el centro del país explica que se haya sostenido en el tiempo. Además, la discriminación contra el sur favorecía al centro. Permitía a los terratenientes de Chile central tener menos competencia para sus productos en los mercados de las grandes ciudades; y a los industriales, comerciantes e importadores de esa zona hacer sus negocios más rentables, con los bajos precios de los productos agrícolas del sur o su falta de acceso al mercado central. Por otro lado, dejaba a los agricultores sureños subordinados en el proceso productivo, como ocurría en el rubro ganadero y triguero.

En un sentido más amplio, la política estatal era parte de una estructura económica y política centralizada que se fortaleció por esos años. Aquello que era ineficiente en términos sectoriales, era eficiente para la

estructura productiva centralizada. Los bajos precios de los productos agrícolas del sur beneficiaban a las grandes ciudades del centro. Las deficiencias de la producción ganadera, cuya crianza se hacía en el sur, favorecían a los ganaderos engorderos del centro y a los importadores de ganado argentino, que compraban barato y vendían caro. Así, el Estado representaba muy bien los intereses agrarios, comerciales, industriales y financieros del centro del país. Los propios terratenientes del centro, estrechamente relacionados, o ellos mismos lo eran, con industriales, comerciantes, banqueros, etc., resultaban favorecidos por la política que discriminaba a la agricultura del sur de Chile.

El sur, escasamente representado y escuchado en el Estado, particularmente en el Gobierno y en los organismos estatales, reacciona contra esto y forma asociaciones agrícolas y partidos políticos regionales. No hay pasividad frente a las políticas estatales y se resiste la discriminación del agro. Contra ello, el sur levanta un movimiento político, a través de sus sociedades agrícolas y de la organización de los agricultores del sur de Chile, como alternativa al poder terrateniente central representado por la Sociedad Nacional de Agricultura. Sin embargo, aunque logran hacer escuchar sus quejas, su acción sólo produce cambios menores de las políticas estatales. Los partidos políticos tradicionales no apoyan sus peticiones, tampoco los diferentes Gobiernos desde 1932. En 1952, aunque parecen tener mayor influencia en el nuevo Gobierno, sus peticiones son escasamente atendidas. La política centralizada anula las demandas regionales con el argumento de los «intereses nacionales». Muchos agricultores del sur también se suman a estas consideraciones y se debilita el movimiento gremial.

A pesar del adverso contexto en que se desenvuelve, el desempeño productivo agropecuario del sur fue destacado, logrando modernizarse, diversificar sus cultivos, mejores rendimientos, más uso de maquinarias, pagar mejores sueldos, etc.

Todo lo anterior se produce en un contexto económico nacional e internacional que agrava las dificultades agrícolas nacionales. Las guerras mundiales, la crisis económica de 1929-1930, el cierre del comercio exterior, la política de los Estados Unidos en materia agraria, los acuerdos comerciales con Argentina, la inflación nacional, entre los principales. Sin embargo, también los efectos de estos aspectos estuvieron condicionados por las decisiones políticas centralizadas, provocando mayores perjuicios al sur del país.

El sur que se considera en esta obra, para efectos de análisis y de comprobación de los planteamientos anteriores, no es todo lo que geográficamente se califica de tal. El sur en Chile comienza en la provincia

de Concepción, donde termina el Chile central, zona que se extiende desde Aconcagua a Ñuble. Desde Concepción a Chiloé, dejando fuera el extremo sur (Aysén y Magallanes), se extiende el sur de Chile. En este libro hemos seleccionado una parte de esta zona, que por antecedentes históricos y productivos nos parece relevante, la que va desde la provincia de Malleco hasta Osorno, incluyendo Cautín y Valdivia. Esta región abarca la llamada Frontera (Malleco y Cautín), que fue incorporada definitivamente al Estado nacional entre 1860 y 1883, y las provincias de Valdivia y Osorno, cuya economía tuvo importancia nacional desde mediados del siglo XIX, con la llegada de inmigrantes germanos y chilenos. Toda esta región recién a comienzos del siglo XX se integró por vía terrestre al centro del país, a través del ferrocarril. Rápidamente tuvo un papel muy importante en la producción agropecuaria nacional.

Por 1910 la región atraía la atención nacional por los graves conflictos por la propiedad de la tierra que se producían entre chilenos, extranjeros e indígenas, resultado de la reciente y rápida incorporación a la economía nacional. El Estado, en parte afectado por la ocupación de tierras, se encargó de resolver tal situación, que provocaba todo tipo de abusos y violencia en la zona, entre 1925 y 1931, dictando una serie de leyes para favorecer la consolidación de la propiedad rural privada, que llevaron al reconocimiento de derechos a los ocupantes de tierras, a los usurpadores y a los propietarios chilenos y extranjeros, así como a la división de las comunidades indígenas.

El Estado favoreció la sanción de situaciones de hecho, apoyando a los poseedores de las tierras, no importando lo ilegítimo de su origen, con lo cual los conflictos por la propiedad de la tierra permanecieron en la zona, poco activos y notorios pero existentes, esperando mejores condiciones para reaparecer. Es interesante destacar que la mayor actividad de «toma de tierras» por los campesinos (esto es, al margen de la acción estatal) durante la reforma agraria se dio en estas provincias. Los que fueron usurpados, engañados o expulsados de sus tierras, pequeños campesinos o indígenas, durante la primera mitad del siglo XX se «la cobraron» en los años sesenta.

Dicho sea de paso, el Estado siguió defendiendo el principio que la propiedad privada sería la base del progreso regional, por lo que mantuvo hasta más allá de 1960 su decisión de acabar con las comunidades indígenas. No lo logró. Básicamente, por la resistencia organizada de los propios mapuches y su integración en nuevas fuerzas políticas que llegaron al poder en 1952 y detuvieron la división de comunidades. Aunque el Estado persistió después de 1958 en promover la división, no se avanzó más. Junto con la resistencia indígena organizada, hubo una revaloriza-

ción al interior de las comunidades del valor de la institución comunitaria, pues ella les permitía ser más eficientes productivamente y conservar sus tierras. Sin embargo, a principios de los años sesenta los indígenas del sur, en su mayoría campesinos, vivían en condiciones de pobreza. Era el sector menos favorecido de la agricultura sureña. Aunque no hemos tratado estas cuestiones en este libro, deben tenerse presente para entender algunos problemas del sur.

Para el Estado, y para muchos chilenos del sur, después de que la propiedad privada estuviera consolidada en la región, llegarían mayores capitales y personas. Este proyecto se estrelló con las dificultades que experimentó la agricultura nacional desde los años treinta en adelante. En muchos aspectos, el sur fue abandonado a su suerte.

En una mirada desde el sur, las inversiones del Estado generalmente no pasaban de Concepción. Todavía a fines de los años cincuenta el sur casi no tenía caminos pavimentados. Los productos agrícolas tenían dificultades para acceder a las ciudades de la zona. Mucho más difícil lo tenían para llegar al principal mercado de sus productos, en el centro del país. Por otro lado, hasta los años sesenta escaseaban también las industrias de elaboración de productos agropecuarios en la zona, por lo que se convertían en verdaderas «colonias» del centro del país, vendiendo sus materias primas. Por último, no menos importante, las importaciones de trigo, carne, mantequilla y productos lácteos para el centro del país, bajaban los precios y ejercían una competencia difícil de superar. En fin, desde el sur, el criterio centralista del Estado era claro.

Las sociedades agrícolas regionales fueron activas opositoras a las decisiones centrales y defensoras de sus intereses regionales, diferentes a los de los terratenientes de Chile central. Además, en los años treinta se crea un partido agrario en el sur, el que en los años cuarenta se integra en un partido de carácter nacional que llegará a ser una importante fuerza política en la década de 1950. Sin embargo, toda esta actividad política no provoca cambios mayores. Las demandas regionales son acalladas. Posiblemente, falta de unidad entre los propios agricultores sureños y el apoyo de muchos de ellos a los intereses «nacionales», que desde el centro eran levantados para eliminar los regionalismos, hicieron que esa fuerza regional se debilitara.

También, desde la perspectiva regional el prototipo de terrateniente atrasado e ineficiente, culpable del estancamiento agrario, era poco conocido. También lo era el inquilino explotado, ignorante y mal pagado. Esos personajes eran del Chile central. En el sur considerado predominaban agricultores con propiedades medianas, cuyas tierras las habían adquirido en las últimas décadas y las explotaban como una empresa; traba-

jadores permanentes, mejor pagados y cuya mayor parte del sueldo la recibían en dinero y no en bienes; pequeños propietarios, muchos de ellos colonos establecidos por el Estado; y comunidades indígenas, con escasa tierra y poco capital. Era un mundo agrario diferente. Tampoco en el sur había el temor de los terratenientes del centro contra la sindicalización y las demandas del campesinado, aunque en coyunturas de mayor gravedad en el centro del país los agricultores del sur terminarían solidarizando con ellos.

Por todo esto, planteamos que los agricultores del sur eran más eficientes que los del centro, y así lo hacían ver al Estado. Por tal razón, esperaban que el Estado retribuyera el esfuerzo productivo que ellos hacían, en un contexto adverso. Los agricultores del sur nunca dudaron que el país pudiera ser autosuficiente en términos agropecuarios, y sólo querían el apoyo del Estado para lograrlo.

Este libro, en definitiva, trata también de las tensiones y conflictos entre el Estado, representado por el Gobierno y los organismos estatales vinculados al agro, y los agricultores del sur de Chile, de la lucha de éstos por modificar la acción del Estado según sus intereses y lograr condiciones favorables para que la agricultura del sur pudiera insertarse de manera competitiva en el mercado nacional; con buenos sistemas de transporte, acceso a los insumos necesarios, con precios rentables que aseguraran e incentivaran la rentabilidad de sus negocios y con buenos precios relativos entre sus productos principales (trigo, carne vacuna y leche), para sostenerlos todos armónicamente. En fin, una política estatal que no discriminara a la agricultura y al sur. Así, los agricultores del sur fueron la conciencia agraria nacional del período.

En este libro se han utilizado fuentes variadas (decretos, leyes, comunicaciones oficiales, prensa, boletines, revistas, estudios de agrónomos, crónicas, censos, estadística, etc.), y la bibliografía sobre la agricultura publicada desde comienzos del siglo xx hasta el presente. Se ha debido compulsar y relacionar materiales diversos y bibliografía procedente de varias disciplinas (obras jurídicas, económicas, políticas, sociológicas, agronómicas e historiográficas), para elaborar un texto que contempla principalmente aspectos políticos y económicos, aunque no descuida en algunas situaciones la dimensión ideológica y social.

Se comienza con una revisión del concepto de estancamiento agrario en el período estudiado. Después, se dedican dos capítulos al período 1910-1935, donde se presenta la situación política y económica general, las características principales de la agricultura nacional, las diferencias entre la agricultura del centro y la del sur, y las políticas estatales para el agro. Posteriormente, los últimos capítulos abarcan desde 1935 hasta

1960. Se estudia allí las diferentes tendencias políticas que se imponen; los cambios de la economía, que favorecen la industrialización y discriminan a la agricultura; y el avance de la urbanización y concentración de la población nacional. Finalmente, se tratan los problemas principales de la agricultura nacional en estos años, comenzando por su evolución y la importancia del sur en el sector, y terminando con una revisión de las políticas estatales para el agro, que en su mayoría perjudicaban más al sur, y las permanentes demandas de las sociedades agrícolas sureñas por conseguir ser atendidos en sus necesidades.

Por último, este libro es una versión corregida y parcial de nuestra tesis doctoral, titulada «La agricultura del sur de Chile (1910-1960) y la conformación del mercado nacional», presentada en el Departamento de Historia de América I, de la Facultad de Geografía e Historia, de la Universidad Complutense de Madrid, en diciembre de 2005, y que fuera dirigida por el profesor Pedro Pérez Herrero.